

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril del año dos mil veintidós (2022).

**REF. MEDIDA DE PROTECCIÓN DE FERNANDO CRUZ
PATIÑO EN CONTRA DE LUZ STELLA RUIZ ORTIZ
(APELACIÓN SENTENCIA). 2022-00020.**

Se decide el recurso de Apelación presentado por el accionado señor FERNANDO RUIZ PATIÑO en audiencia y en contra de la resolución proferida el día dieciocho (18) de agosto del año dos mil veinte (2020) por la Comisaría Once de Familia Suba II de esta ciudad, dentro de la medida de protección indicada en la referencia.

I.- ANTECEDENTES:

1- *El 23 de enero de 2020, el señor Fernando Cruz Patiño solicita medida de protección a su favor manifestando “mi excónyuge tiene un problema, no ha realizado el duelo por el divorcio y a raíz de eso me ha formulado siete denuncias ante fiscalía, por alzamiento de bienes, violencia intrafamiliar, amenazas y otros delitos, de la cuales me enteré el pasado 23 de enero de 2020, con el único objeto de hacerme daño y de mortificarme, debido a ello, se me ha agravado un problema de apnea del sueño, que padezco precisamente por la persecución de mi ex cónyuge desde el año 2012, igualmente ha formulado demandas ante juzgados civiles cuya última audiencia fue el 24 de enero de 2020, también ha formulado denuncias contra mi madre e hijo, solo para mortificarme, por ser mi sostén psicológico, tengo miedo que mi excónyuge me vaya mandar matar, si ocurre algo en contra mía de mi madre o mi hijo la persona responsable es ella”*

2.- *La anterior medida de protección correspondió a la Comisaría Once de Familia Suba II de esta ciudad, despacho que la admitió por auto del 11 de febrero de 2020.*

3.- *Admitida a trámite la anterior solicitud y una vez fenecida la etapa probatoria, procedió el a quo a proferir resolución el día dieciocho (18) de agosto del año 2020, mediante la cual se abstuvo de proferir medida de protección en favor del señor Fernando Cruz Patiño en contra de la señora Luz Stella Ruíz Ortíz.*

4.- *Inconforme con el fallo proferido, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó, manifestando “he solicitado copias de las actuaciones desde hace ya más de dos meses y no he tenido acceso al expediente, asumo que por el tema de la pandemia no me las entregaron, pero me las habría podido enviar por correo electrónico, por lo anterior reitero respetuosamente esa petición de copia y solicitara (sic) un tiempo prudencial para poder sustentar debidamente el recurso, no obstante no existe pronunciamiento del Despacho respecto a las copias solicitadas solicito se me informe si a pesar de ello debo presentar el recurso en ese momento o si se me concede el termino para hacerlo, en segundo lugar quiero muy atentamente llamar la atención del Despacho en el sentido que previendo que la perpetradora de los actos de violencia en mí contra iba a negar la autoría de los mismo, solicite que se practicara una prueba científica ante medicina legal, para determinar técnicamente y detectar así que los actos de persecución obedecen a un problema de pareja no*

resuelto por parte de la victimaria y como quiera que las Comisarías disponen de un equipo interdisciplinario para atender este tipo de situaciones solicite- que una vez verificado que es lo que quiera esta mujer y porqué me continua persiguiendo por que persigue a ml hijo y a mi madre, se le diera el tratamiento adecuado, porque si no es así, los actos de violencia en mi contra van a continuar y como bien lo decía el profesional que siguió esta diligencia, llevamos en este tema más de 5 años, donde la mujer continua con su dificultad, en cuanto a sumir el duelo, por la separación y debido a eso, segura inoportuna donde y tratando de provocarme para ver si yo caigo en la trampa de responder a sus actos para volver a las Comisarias, volver a formular quejas y buscar de esa manera que me sancionen injustamente, debo manifestar también que dentro de pronunciamiento, por parte las pruebas que pedí vía correo electrónico y que no fueron objeto de pronunciamiento, por parte del profesional que atiende la diligencia, pedí escuchar el testimonio del doctor Pedro Yesid Susa arlas, quien comparecería a la diligencia a través del suscrito, toda vez que el doctor Susa es testigo del acto de agresión en mi contra realidad por la perpetradora en el juzgado 15 civil del circuito en la rama judicial dice que fue el 24 de enero de 2020 que fue la fecha diligencia que de pronto fue un error de digitación, el Doctor Susa es mi apoderado en ese proceso y el presencio cuando la mujer salto a la puerta a buscarme y me hizo gesto ofensivos y agresivos que por respeto a ustedes no los hago acá, pero si quiere los hago, tratando de desafiarme y provocarme ante lo cual precisamente por consejo de él y por voluntad propia no reaccione no respondí, la agresora ha insistido en que los soportes allegados a la medida de protección vulneran su derecho a la intimidad, cuando lo que realmente pretende a través de ello es no ser desenmascarada científicamente de que es ella quien me ataca y me agrede permanente se ha valido de su condición de mujer para hacer actos consistentes en fingir llanto, hacerse la víctima y gracias a ello ha lo grado obtener decisiones favorables, el último acto de agresión ata del mes pasado si mal no recuerdo, cuando allego copias de mi solicitud de medida de protección ante la Comisaria 6 de familia Kennedy 3 aduciendo, que por el hecho de haber acudido a esta instancia yo había incumplido una medida de protección que a su favor habla ordenado dicha Comisaría, pretendiendo que la comisaria de Kennedy adopte una decisión en su favor para hacer disuadirme de acudir nuevamente a esta Comisaria cuando vuelva a ejercer actos violencia en mi contra o en contra de mi familia, si el despacho hubiera practicado las pruebas que yo solicite, especialmente la prueba científica y el testimonio del doctor Pedro, creo que la decisión habría sido diferente, por lo anterior solicito al fallador de segundo nivel que en virtud de los principios de acceso a la justicia me brinde la protección adecuada revoque la decisión de primera instancia y ordene la medida de protección a mi favor, dejo constancia que a raíz de la petición de medida de protección que presente en esa Comisaria he sido objeto de amenazas en contra de mi vida, primero por dos sujetos en motocicleta que me abordaron advirtiéndome ... hp te vamos a quebrar si sigues jodiendo a la señora" igualmente he recibido llamadas a mi número de celular con amenazas similares que lamentablemente no he podido grabar porque no se ha qué hora me las van hacer y al revisar el número de donde se origina no es posible determinar toda vez que aparece como numero privado, al respecto quiero precisar, que ni puedo afirmar en grado de certeza que la autora material o intelectual de esas amenazas sea la aquí convocada, pero si quiero ser enfático en señalar que no he tenido problemas con ninguna "señora" y que antes de haber interpuesto la solicitud de medida de protección nunca había sido objeto de tales amenazas, eso me genera un gran temor y por eso solicite hoy y en la audiencia anterior no ser confrontado con la victimaria aquí presente porque el temor y las amenazas son reales, yo solicite también que me enviaran a medicina legal para demostrar científicamente que la agudización de mi patología de apnea del sueño se ha incrementado y se ha vuelto insostenible precisamente por los actos de acoso de que estoy siendo víctima, si la prueba se practica estoy seguro que esta Comisaria dilucidará la duda que según el fallo impugnado observa en lo que tiene que ver respecto a la relación entre mi enfermedad y los actos de acoso de que he venido siendo víctima, si bien es cierto el Despacho dio lectura a algunos apartes de sentencias de la corte constitucional donde se privilegia a las mujeres por el solo hecho de pertenecer a ese género, en tema de familia no es menos cierto que el artículo 3 de la ley 296 del 94 creo que es consagra

como principio rector que las autoridades de familia deben garantizar la igualdad entre señores y mujeres, norma que solicito sea aplicada en este caso, porque lamentablemente cuando los señores acudimos a las Comisarías de Familia o no nos creen o somos objeto de burlas porque consideran que por ser señores no somos objeto de amenazas no tenemos miedo y no somos susceptibles de agresión, lo cual no es cierto, pues la realzada muestra otra cosa, y hoy los porcentajes de agresión de señores y mujeres están prácticamente equilibrados, yo pienso que con base en esto pues debería en segunda instancia ordenarse la medida de protección a mi favor en virtud del principio de igualdad e imparcialidad. La agresora ha insistido en que por mi condición de ex empleado del DAS soy una persona peligrosa, lo cual no es más que una argucia para tratar de poner de su lado a quien ha asistido a diferentes diligencias entre ellas la que hoy nos convoca, yo pertenecí al departamento, pero mi trajo en los últimos 15 años fue en una oficina donde no portaba armas, donde obtuve las mejores calificaciones por mi desempeño y nunca fui objeto de quejas por acoso por parte de las personas que en su momento estuvieron bajo mi dirección ni por compañeros, lo cual desdice de la transparencia de la mujer convocada a esta audiencia es todo muchas gracias, uno de los soportes para pedir la medida de protección a mi favor es que la convocada ha utilizado como patente de corzo la medida ordenada a su favor por la Comisaría de Kennedy y entonces si no se ordena esta medida de protección en mi favor la mujer continuara ejerciendo los actos de violencia en mi contra mi madre y mi hija y entonces deberé nuevamente informar a esta Comisaria, lo que yo quiero entre otras cosas es que además de ordenarse la medida de protección a mi favor se le dé el tratamiento psicológico o psiquiátrico a mi agresora para que cese en su persecución contra mí”.

5.- Siendo remitido, el presente asunto con el fin surtir el recurso de apelación, procede este Despacho Judicial a desatar el mismo con base en las siguientes,

II.- CONSIDERACIONES:

El ideal de la familia es la armonía, la comprensión y el entendimiento que conllevan la estabilidad y la placentera convivencia entre sus miembros. El resquebrajamiento de ese estado, por lo general tiene su génesis en los maltratamientos físicos o psicológicos de que se hacen padre e hijos entre sí o éstos a su prole y demás personas que la conforman. Esas conductas que hacen imposible la comunidad de vida en la familia y que se constituyen en irrespeto entre quienes la componen es deber del Estado prevenirlas y sancionarlas si es que se han producido.

Precisamente con el fin de sancionar las conductas atentatorias contra la estabilidad física, emocional y psicológica de la familia, el legislador promulgó la ley 294 de 1996, mediante la cual desarrolló el artículo 42 de la Carta Política, ley que contiene normas para prevenir, remediar y sancionar los actos constitutivos de violencia intrafamiliar.

Dicha ley contempla en el inciso 1º del artículo 4º que: **“Toda persona que en el contexto de una familia sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, pedir al juez de familia o promiscuo de familia; promiscuo municipal o civil municipal, si faltare el de familia, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente.**

A su turno el art. 164 del C.G.P. es claro al disponer que: **“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.**

Así mismo, el art. 167 *ibídem* prevé: **“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”**.

Sobre este particular el Dr. HERNANDO DEVIS ECHANDIA, en su obra *PRUEBAS JUDICIALES*, tomo II, 2ª edición, pág. 141 y 142 dice: **“Carga de la prueba es una noción procesal, que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitar las consecuencias desfavorables o favorables, a la otra parte.**

...El fundamento de la carga de la prueba debe examinarse teniéndose en cuenta los dos aspectos de la noción: la regla de juicio para el juez, y la distribución entre las partes del riesgo de la falta de prueba.

Por el primer aspecto, su fundamento radica en la extraordinaria importancia que reviste esta noción en el campo general del derecho y en el particular del proceso, como acabamos de verlo en el numeral anterior: la seguridad jurídica, la armonía social, el interés general en que se realicen los fines propios del proceso y la jurisdicción, reclaman su existencia.

Creemos que el fundamento de la carga de la prueba, como norma de distribución del riesgo de la falta de certeza (segundo aspecto de la noción), se encuentra en los principios de la lógica, la justicia distributiva y la igualdad de las partes ante la ley y el proceso, esto es, en la necesidad de darle a todas las partes una adecuada e igual oportunidad y una guía segura para la defensa de sus derechos y de su libertad; en lo penal, además, en la necesidad jurídica de absolver al reo cuando no haya plena prueba en su contra (*in dubium pro reo*).

Sea lo primero advertir que toda prueba ante todo debe ser conducente y pertinente. La conducencia es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho, mientras que la pertinencia se refiere a la adecuación que debe haber entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba de éste.

Por lo tanto, no se admitirá la prueba sino cuando el hecho o acto que se vaya a probar es conducente y además legalmente eficaz. Si faltare una de estas condiciones, la prueba es inadmisibile.

“Se entiende por prueba inconducente la referente a un hecho tal que si fuere demostrado no influirá en la decisión total o parcial del litigio.- Contrario sensu, es impertinente la prueba cuando se pretende probar un hecho que, aun demostrado, no sería de la naturaleza para influir en la decisión del asunto”.-

Según la Corte Suprema de Justicia, **“La inconducencia se refiere a hechos sin relación con el asunto debatido”**.

Descendiendo al caso objeto de estudio, encuentra el Despacho que en audiencia de fecha 18 de agosto de 2020, estando presentes las partes, la autoridad administrativa procede a revisar las pruebas allegadas por las partes, las cuales se encuentran relacionadas en los folios 355 a 360, por lo que el accionante contó con la oportunidad procesal de manifestar su inconformidad frente al acervo probatorio, para la defensa de sus derechos, sin embargo guardó silencio en el momento procesal oportuno.

Precisado lo anterior y revisadas las pruebas recaudadas, observa el Despacho que no existen elementos de juicio que indiquen a esta juzgadora, que la señora Luz Stella Ruíz Ortiz, haya realizado agresión alguna en contra del señor Fernando Cruz Patiño, pues no obra dentro del plenario prueba alguna con la que se acredite que efectivamente la denunciada, incurrió en dichos actos.

Consecuencia de lo anterior, deberá confirmarse la determinación que fuera adoptada por la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, en audiencia celebrada el 18 de agosto de 2020, al denegar las pretensiones solicitadas por la accionante, por cuanto se halla acorde a derecho y a la realidad fáctica que arrojan las diligencias, por lo tanto a juicio de este Juzgado, la decisión tomada se ajustó a derecho, toda vez que no es posible sancionar y decretar medida de protección en contra de alguna persona, cuando no existen suficientes medios probatorios que demuestren las presuntas agresiones, ya sean verbales, físicas o psicológicas, como quiera que se estarían vulnerando sus derechos fundamentales.

En consecuencia y no existiéndole razón al recurrente, el fallo apelado será confirmado en su integridad y así se dispondrá.

*Por lo expuesto, el **Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,*

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión tomada por la Comisaría Once de Familia Suba I de esta ciudad, el 18 de agosto de 2020.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, a todos los interesados, lo aquí decidido.

TERCERO: Previas las constancias de rigor envíese la actuación al despacho de origen. Ofíciase.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA MEJÍA MEJÍA
LA JUEZ

<p>JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>El anterior auto se notificó por estado <u>No 043.</u></p> <p><u>Hoy 22 de abril de 2022</u></p> <p>CAROLINA SANTAMARÍA LUNA Secretaria</p>

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito

Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **103321dc7e7fb3d9d9736ed89fcd57e19c5c6b3207a30e0d319110565ff2539d**

Documento generado en 21/04/2022 06:18:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>